



La consulta plantea si resulta de aplicación a la consultante lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, teniendo en cuenta que sus clientes únicamente son personas jurídicas, por lo que, en principio, sería de aplicación la excepción prevista en el artículo 2.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, aprobado por Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. Igualmente se efectúa esta consideración con carácter general en relación con las normas reguladoras de la privacidad en las comunicaciones electrónicas.

Partiendo del marco general en lo referente a la regulación de la privacidad en el ámbito de las comunicaciones electrónicas, debe recordarse que el artículo 1 de la Directiva 2002/58/CE, del parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas), establece que “la presente Directiva armoniza las disposiciones de los Estados miembros necesarias para garantizar un nivel equivalente de protección de las libertades y los derechos fundamentales y, en particular, del derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas, así como la libre circulación de tales datos y de los equipos y servicios de comunicaciones electrónicas en la Comunidad”, añadiendo en su apartado 2 que “las disposiciones de la presente Directiva especifican y completan la Directiva 95/46/CE a los efectos mencionados en el apartado 1. Además, protegen los intereses legítimos de los abonados que sean personas jurídicas”.

En consecuencia, el legislador comunitario ha venido a establecer, en el ámbito de las comunicaciones electrónicas, un ámbito de aplicación de las normas reguladoras de la privacidad y la protección de datos de carácter personal distinto al establecido con carácter general en la Directiva 95/46/CE, caracterizado por garantizar la protección de los derechos e intereses legítimos de las personas jurídicas. Así lo recuerda el apartado 12 del Preámbulo de la Directiva, al disponer que “los abonados de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público pueden ser personas físicas o jurídicas. Al complementar la Directiva 95/46/CE, la presente Directiva pretende proteger los derechos fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la intimidad, así como los intereses legítimos de las personas jurídicas. La presente Directiva no supone obligación alguna por parte de los Estados miembros de hacer extensiva la aplicación de la Directiva 95/46/CE a la

protección de los intereses legítimos de las personas jurídicas, que está garantizada en el marco de la legislación comunitaria y nacional”.

En consecuencia, las normas previstas con carácter general en la Directiva 2002/58/CE, incluyendo las que supongan una remisión específica a las normas de protección de datos habrán de considerarse aplicables no sólo al tratamiento de datos de personas físicas, sino también cuando dichos datos se refieran a personas jurídicas, con independencia de que ello no suponga, con carácter general, una ampliación del ámbito general establecido en esas normas a sectores de actividad distintos al de las comunicaciones electrónicas.

En este sentido, el artículo 38 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones viene a desarrollar en sus apartados 3 y siguientes los derechos derivados de la aplicación de la Directiva 2002/58/CE anteriormente citada, reconociendo tales derechos no sólo a las personas físicas, sino también a las personas jurídicas, como se desprende del hecho de que el reconocimiento general de los derechos se realice de los abonados a los servicios de comunicaciones electrónicas, que podrán ser tanto personas físicas como jurídicas, sin perjuicio de que, además, se reconozcan determinados derechos también de los usuarios que tendrán, con carácter general, la condición de personas físicas.

Por tanto, como regla general, las normas de privacidad en las comunicaciones electrónicas, incluidas las referencias efectuadas a las reguladoras del derecho fundamental a la protección de datos serán aplicables tanto al tratamiento de datos de personas físicas como al de personas jurídicas, siendo así de aplicación, cuando proceda, la Ley Orgánica 15/1999.

Efectuada esta consideración general, la consulta se refiere específicamente a los deberes derivados de la aplicación del artículo 8 de la Ley 25/2007, que establece lo siguiente:

*“1. Los sujetos obligados deberán identificar al personal especialmente autorizado para acceder a los datos objeto de esta Ley, adoptar las medidas técnicas y organizativas que impidan su manipulación o uso para fines distintos de los comprendidos en la misma, su destrucción accidental o ilícita y su pérdida accidental, así como su almacenamiento, tratamiento, divulgación o acceso no autorizados, con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en su normativa de desarrollo.*

*2. Las obligaciones relativas a las medidas para garantizar la calidad de los datos y la confidencialidad y seguridad en el tratamiento de los mismos serán las establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y su normativa de desarrollo.*



*3. El nivel de protección de los datos almacenados se determinará de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en su normativa de desarrollo.*

*4. La Agencia Española de Protección de Datos es la autoridad pública responsable de velar por el cumplimiento de las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y de la normativa de desarrollo aplicables a los datos contemplados en la presente Ley.”*

La solución que habrá de darse a este supuesto resultará necesariamente similar a la que, con carácter general, se ha descrito con anterioridad, partiendo nuevamente del alcance establecido por el legislador comunitario a las obligaciones de los operadores en relación con la retención o conservación de los datos de localización y tráfico en el marco de las comunicaciones electrónicas, contenidas en la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE.

Así, el artículo 1.2 de la Directiva, reproducido por el artículo 1.2 de la Ley 25/2007, dispone que “La presente Directiva se aplicará a los datos de tráfico y de localización sobre personas físicas y jurídicas y a los datos relacionados necesarios para identificar al abonado o al usuario registrado”.

En consecuencia, las normas de la Directiva, del mismo modo que las de las normas nacionales que procedan a su transposición, deberán resultar aplicables al tratamiento de los datos de tráfico y localización tanto de personas físicas como de personas jurídicas.

En concreto, el artículo 7 de la Directiva 2005/24/CE dispone lo siguiente:

*“Sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones adoptadas de conformidad con las Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE, los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de una red pública de comunicaciones cumplan, en lo que respecta a los datos conservados de conformidad con la presente Directiva, como mínimo los siguientes principios de seguridad de los datos:*

*a) los datos conservados serán de la misma calidad y estarán sometidos a las mismas normas de seguridad y protección que los datos existentes en la red;*

*b) los datos estarán sujetos a las medidas técnicas y organizativas adecuadas para protegerlos de la destrucción accidental o ilícita, pérdida*

*accidental o alteración, así como almacenamiento, tratamiento, acceso o divulgación no autorizados o ilícitos;*

*c) los datos estarán sujetos a medidas técnicas y organizativas apropiadas para velar por que sólo puedan acceder a ellos las personas especialmente autorizadas, y*

*d) los datos, excepto los que hayan sido accesibles y se hayan conservado, se destruirán al término del período de conservación.*

Igualmente, el artículo 9.1 establece que “cada Estado miembro nombrará una o más autoridades públicas responsables de controlar la aplicación en su territorio de las disposiciones adoptadas por los Estados miembros de conformidad con el artículo 7 en relación con la seguridad de los datos conservados. Dichas autoridades podrán ser las mencionadas en el artículo 28 de la Directiva 95/46/CE”.

El legislador en el momento de transponer al derecho interno la norma comunitaria ha determinado que los estándares de seguridad y de calidad de los datos sean los previstos en la Ley Orgánica 15/1999, así como que esta Agencia Española de Protección de Datos sea la autoridad encargada de velar por el cumplimiento de dichas normas.

Ello no implica que las citadas normas únicamente sean aplicables en el supuesto de tratamiento de datos de tráfico y localización de personas físicas, sino precisamente lo contrario: que las normas de protección de datos previstas en la Ley Orgánica 15/1999 y a las que se refiere la Ley 25/2007, serán de aplicación en todo caso cuando resulte de aplicación la Ley últimamente citada, con independencia de que los datos se refieran a personas físicas o jurídicas.